



Expediente Nº: E/00031/2016

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante las entidades CAJA DE SEGUROS REUNIDOS. Cia. de Seguros y reaseguros S.A. (CASER), PLATAFORMA DE GESTION IBERICA DIRECTA S.L. en virtud de denuncia presentada por D. **A.A.A.** y teniendo como base los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de noviembre de 2015, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. **A.A.A.** (en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que con fecha 8/09/2015 formalizó mi padre la inscripción de toda la familia en el Gimnasio propiedad de SERVICIO LOS MONDRAGONES S.L., para realización de actividades deportivas dentro del mismo, y siendo cliente de la empresa SERVICIO LOS MONDRAGONES S.L. ha cedido mis datos personales sin mi consentimiento a CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (CASER) y como consecuencia de ello he recibido póliza de seguro de Hospitalización por Accidente, que no he solicitado, ni contratado en ningún momento, por tanto se ha realizado sin mi consentimiento.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

De la información y documentación aportada por CASER se desprende:

1. El denunciante figura en los ficheros de la entidad, exclusivamente, como tomador la póliza de Accidentes Enfermedades Graves.

En el fichero figura información relativa a la filiación del tomador del seguro (nombre, DNI y dirección completa) así como la cuenta corriente de domiciliación del cobro de los recibos de primas.

2. Aporta la entidad copia de las Condiciones Particulares y Generales de la Póliza citada, suscrita, por la mediación de la Agencia de Seguros, PLATAFORMA DE GESTIÓN IBÉRICA DIRECTA, S.L. En el documento, consta como comediador CASER MARKETING DIRECTO SL.

Según consta en el Registro Mercantil Central, el objeto social de PLATAFORMA DE GESTIÓN IBÉRICA DIRECTA, S.L. es:

<<Consultoría, agencia de seguros vinculado y prestación de servicios profesionales.>>

En tanto que el de CASER MARKETING DIRECTO SL es:

<<La mediación en seguros privados en calidad de sociedad de agencia



vinculada, conforme y con especial acatamiento a la normativa reguladora de la mediación en seguros privados. etc. >>

3. Aporta la entidad Impresión de la pantalla relativa a los recibos de primas en la que figura los recibos emitidos, así como la anulación de los mismos, apareciendo como emitidos cinco con una frecuencia mensual entre el 6/10/2015 y el 6/2/2016, apareciendo todos ellos anulados.
4. Aporta igualmente impresión de la pantalla de identificación del seguro donde figura que la póliza suscrita por el denunciante tomó efecto el día 6 de octubre de 2015, anulándose posteriormente en esa misma fecha por impago de los recibos de primas.
5. En prueba de la contratación, aporta CD comprensivo de la llamada telefónica en la que se otorgó su consentimiento a la contratación de la póliza de seguro de Hospitalización por Accidente.

Escuchada la grabación se encuentra que en ella se realiza una oferta de seguro y da su consentimiento para la contratación alguien que se identifica como el denunciante. Se informa al contratante de la forma y plazo de ejercer el desistimiento a la contratación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

El artículo 6.1 de la LOPD que dispone que *“El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.*

El apartado 2 del mismo artículo añade que *“no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación comercial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se*



comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento que sea necesaria para el mantenimiento del contrato.

El tratamiento de los datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo) *“...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite el individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...).*

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos.

III

En el presente caso, el tratamiento de datos realizado por la entidad denunciada fue llevado a cabo empleando una diligencia razonable. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que el denunciante figura en los ficheros de la entidad, exclusivamente, como tomador la póliza de Accidentes Enfermedades Graves.

Por otra parte, en el fichero figura información relativa a la filiación del tomador del seguro (nombre, DNI y dirección completa) así como la cuenta corriente de domiciliación del cobro de los recibos de primas.

Asimismo, en las Condiciones Particulares y Generales de la Póliza citada, suscrita, por la mediación de la Agencia de Seguros, PLATAFORMA DE GESTIÓN IBÉRICA DIRECTA, S.L., consta como comediador CASER MARKETING DIRECTO SL.

Es de señalar que la entidad aporta Impresión de la pantalla relativa a los recibos de primas en la que figura los recibos emitidos, así como la anulación de los mismos, apareciendo como emitidos cinco con una frecuencia mensual entre el 6/10/2015 y el 6/2/2016, apareciendo todos ellos anulados.

Aporta igualmente impresión de la pantalla de identificación del seguro donde figura que la póliza suscrita por el denunciante tomó efecto el día 6 de octubre de 2015, anulándose posteriormente en esa misma fecha por impago de los recibos de primas.



A mayor abundamiento en el CD comprensivo de la llamada telefónica en la que se otorgó su consentimiento a la contratación de la póliza de seguro de Hospitalización por Accidente, se encuentra que en ella se realiza una oferta de seguro y da su consentimiento para la contratación alguien que se identifica como el denunciante, y se informa al contratante de la forma y plazo de ejercer el desistimiento a la contratación.

Por lo tanto, se ha de analizar el grado de culpabilidad existente en el presente caso. La jurisprudencia ha venido exigiendo a aquellas entidades que asuman en su devenir, un constante tratamiento de datos de clientes y terceros, que en la gestión de los mismos, acrediten el cumplimiento de un adecuado nivel de diligencia, debido a las cada vez mayor casuística en cuanto al fraude en la utilización de los datos personales. En este sentido se manifiesta, entre otras, la sentencia de la Audiencia Nacional de veintinueve de abril de 2010 al establecer que *“La cuestión que se suscita en el presente caso, a la vista del planteamiento de la demanda, no es tanto dilucidar si la recurrente trató los datos de carácter personal de la denunciante sin su consentimiento, como si empleó o no una diligencia razonable a la hora de tratar de identificar a la persona con la que suscribió el contrato de financiación”* o como se recoge en la sentencia de la Audiencia Nacional de diez de marzo de 2015 al señalar que: *“por tanto, ningún reproche cabe hacer a la actuación de Telefónica Móviles España S.A. en este ámbito sancionador, pues como ya se ha expuesto actuó con la diligencia exigible, tratando los datos del denunciante a partir de la apariencia de legitimidad de la contratación de la línea en cuestión que le otorgaba la grabación telefónica (...)*

En definitiva, no cabe apreciar culpabilidad en la actuación de la entidad recurrente, por lo que no puede imputársele o ser sancionada ex artículo 130 LRJPAC por vulneración del principio de consentimiento ni tampoco, y en correlación, del principio de calidad de datos pues el requerimiento previo de pago se realizó en el domicilio que según la citada grabación telefónica correspondía al titular de la línea”.

De acuerdo a estos criterios, se puede entender que CAJA DE SEGUROS REUNIDOS. Cia. de Seguros y reaseguros S.A. (CASER), PLATAFORMA DE GESTION IBERICA DIRECTA S.L emplearon una razonable diligencia, ya que adoptaron las medidas necesarias para identificar a la persona que realizaba la contratación.

IV

Por todo lo cual, se ha de concluir, que tras el análisis de los hechos denunciados y de las actuaciones de investigación llevadas a cabo por esta Agencia, no se han acreditado elementos probatorios que permitan atribuir a CAJA DE SEGUROS REUNIDOS. Cia. de Seguros y reaseguros S.A. (CASER), PLATAFORMA DE GESTION IBERICA DIRECTA S.L una vulneración de la normativa en materia de protección de datos.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:



- 1 **PROCEDER AL ARCHIVO** de las presentes actuaciones.
2. **NOTIFICAR** la presente Resolución a CAJA DE SEGUROS REUNIDOS. Cia. de Seguros y reaseguros S.A. (CASER), y a PLATAFORMA DE GESTION IBERICA DIRECTA S.L..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos